

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 12º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-14277-2020  
CARATULADO : PIZARRO/FISCO DE CHILE /CDE TEMUCO

Santiago, veintiuno de Marzo de dos mil veintidós

**VISTO:**

Con fecha 21 de septiembre de 2020 (folio 1) y rectificación de folio 9, comparece LUIS ALVARO PIZARRO QUINTANILLA, jubilado, domiciliado en pasaje Navas N° 623, dpto. 402, Villa México, comuna de Cerrillos, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del FISCO DE CHILE, representado por el Presidente del CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, don JOSÉ ANTONIO PERIBONIO PODUJE, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Refiere que en el contexto del régimen de facto que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, bajo cuyo imperio se habría implementado una política sistemática de detención, tortura y desaparición de ciudadanos opositores, fue detenido en su lugar de trabajo, en la Gobernación del Departamento Presidente Aguirre Cerda, el 13 de septiembre de 1973, por Carabineros que ocupaban la gobernación, quienes lo mantuvieron como prisionero en diversos recintos dispuestos al efecto (Estadio Chile, Estadio Nacional), donde además lo sometieron regularmente a diversos tormentos físicos y psicológicos (golpes, aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo, simulaciones de fusilamiento), luego de un mes encierro, y torturas, fue dejado en libertad, pero en los años siguientes, fue perseguido, amedrentado, vigilado, perdió sus empleos y permaneció cesante por varios años.

Afirma que es víctima de represión política y violación de derechos humanos.

Sostiene que ha sufrido un severo daño de índole extrapatrimonial, el cual se ha manifestado durante toda su vida, desde que tuvieron lugar los acontecimientos ya reseñados, mediante lesiones y traumas psicológicos.

Argumenta que, conforme al derecho internacional y a la Constitución Política de la República y Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, fue víctima de un crimen de lesa humanidad, lo que sería fundamental a la hora de resolver en cuanto a la responsabilidad de reparación que le cabe al Estado de Chile en este caso.

Cita profusa jurisprudencia en la que se ha considerado un estatuto de normas que privilegian y desarrollan los principios de la primacía constitucional y de juridicidad,



«RIT»

**Foja: 1**

debiendo ponderarse el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito de los derechos humanos a la luz de las normas de carácter público e internacionales, y no bajo las normas del derecho privado, tornándose así en imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Termina solicitando que se condene al demandado al pago de \$90.000.000, o la suma que el tribunal determine, a título de indemnización por daño moral, más reajustes, intereses y costas.

**Con fecha 20 de octubre de 2020**, se practicó la notificación de la demanda y su proveído.

**Con fecha 6 de noviembre de 2020**, el demandado contestó el libelo pretensor, solicitado el rechazo de éste en todas sus partes.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, la que funda en que el demandante ya ha sido suficientemente indemnizado con motivo de los hechos por él invocados, mediante transferencias directas de dinero (pensión anual establecida por la Ley N° 19.992), asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda) y otras reparaciones de tipo simbólico (construcción de memoriales y del Museo de la Memoria, y establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Premio Nacional de los Derechos Humanos).

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo a su juicio rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por el actor, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, 20 de octubre de 2020, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior, para el evento de estimarse no aplicable la norma citada, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, por cuanto desde la fecha en que pudo ser exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda, también habría transcurrido el plazo antes mencionado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté



**Foja: 1**

expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.

En tercer lugar, y en subsidio de las defensas anteriores, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia. Además, sostiene que cualquier indemnización que pudiera concederse en virtud de la sentencia que dirima esta controversia, debiera considerar los montos ya recibidos por el actor por parte del Estado, pues, de lo contrario, aquel recibiría un doble pago.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que solicita la parte demandante no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente litis.

**Con fecha 19 de noviembre de 2020**, la parte demandante evacuó el trámite de réplica.

En primer lugar, que la Excma. Corte Suprema, ya ha desestimado la alegación del Fisco de Chile, señalando que “la normativa invocada por el Fisco, solo establece un sistema de pensiones asistenciales”. Asimismo, destaca que Todos los actos de reparación llevados a cabo por el Estado luego de 1990 solo han venido en compensar parcialmente los daños sufridos por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo cual no obsta en modo alguno el ejercicio del derecho a petición mediante la demanda incoada en autos.

En segundo lugar, afirma que el propio Estado de Chile ha reconocido en el ámbito internacional que las acciones por este tipo de hechos son



«RIT»

**Foja: 1**

Imprescriptibles. Asimismo, la Corte Suprema así también lo ha reconocido en diversos fallos, descartando que resulten aplicables las disposiciones del Código Civil “*en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del estado como común supletorio a todo el régimen jurídico hoy resulta improcedente*”. Ello en atención a que el hecho cuya reparación se demanda es un delito de lesa humanidad.

**Con fecha 2 de diciembre de 2021**, el demandado evacuó la duplica, en la que ahonda en las argumentaciones ya vertidas en la contestación.

**Con fecha 15 de octubre de 2021**, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta hubo de recaer.

**Con fecha 10 de marzo de 2022**, se citó a las partes para oír sentencia.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que LUIS ALVARO PIZARRO QUINTANILLA, demandó en juicio ordinario de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don JOSÉ ANTONIO PERIBONIO PODUJE, a objeto de que el ente estatal sea condenado a pagar en su favor \$ 90.000.000, o la suma que el Tribunal determine, más reajustes, intereses y costas, a título de indemnización por el daño moral que se le infirió con ocasión de la privación de libertad y torturas de las que fue víctima a manos de agentes del Estado.

**SEGUNDO:** Que, legalmente emplazado, el demandado opuso primeramente la excepción de reparación satisfactiva, por ya haber recibido el demandante diversos beneficios asistenciales por parte del Estado. Asimismo, opuso la excepción de prescripción extintiva conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Por último, alega lo desproporcionado que resulta la suma pretendida por el actor, la improcedencia de que se le indemnice nuevamente a raíz de los mismos hechos y la impertinencia de aplicar intereses y reajustes sobre una eventual indemnización que se declare en la sentencia que dirima la controversia.

**TERCERO:** Que, en el trámite de la réplica el actor buscó refutar las defensas opuestas por el demandado, manifestando que no ha existido una reparación íntegra por parte del Estado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que la prescripción civil no opera tratándose de atentados de lesa humanidad, y que es el Tribunal quien en definitiva debe fijar el monto de la indemnización que corresponde.

**CUARTO:** Que en el trámite de la dúplica el demandado profundizó las argumentaciones ya vertidas en la contestación.

**QUINTO:** Que, para la prueba de sus asertos, la parte demandante acompañó, legalmente y sin objeción de contrario, los siguientes documentos:



Foja: 1

1. Extracto de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura., en donde consta con el N°19231, el nombre del demandante, don Luis Álvaro Pizarro Quintanilla.
2. Informe Psicológico de daño del demandante Luis Álvaro Pizarro Quintanilla, emitido por el PRAIS, de fecha 2 de diciembre de 2020.
3. Informe Valech.

**SEXTO:** Que la parte demandante también allegó al proceso la declaración de testigos que legalmente juramentados depusieron al temor de los puntos de prueba, que a continuación se reseñan sucintamente:

▪ José Santos Calderón Urzúa

Declara que conoció a don Luis Pizarro, en la Gobernación Pedro Aguirre Cerda, declara que concurrió a la Gobernación el día 14 de septiembre de 1973, donde se enteró que don Luis Pizarro había sido detenido por Carabineros de la 12° Comisaria, donde se encontraba. Declara que después se enteró que lo habían trasladado al Estadio Chile, que había sufrido maltratos ilegítimos y tortura, también sufrió tortura psicológica. Posteriormente fue traslado al Estadio Nacional, donde permaneció alrededor de un mes. Declara que llamaba constantemente a la Sra. de don Luis, para informarse. Declara que luego de esa experiencia de tortura y maltratos ilegítimos, don Luis se aisló de todos. También señala que años más tarde, se lo encontró en una micro, era el chofer y pudo conversar con él y enterarse de lo que había vivido. Señala que siendo sociólogo, pudo percibir el daño psicológico del demandante. Concluye que el Estado es responsable de los daños sufridos por don Luis Pizarro.

▪ Julio Antivilo Veas

Declara que don Luis Pizarro, sufrió daños y perjuicios a consecuencia de la acción del Estado de Chile. Señala que fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en los lugares de detención (carabineros, Estadio Chile y Estadio Nacional), fue sometido a tratos vejatorios y torturas, durante largo tiempo después de su liberación vivió una situación de permanente temor a ser detenido él o su familia, lo que transformó su personalidad. Situación que se extendió durante toda la dictadura. Declara que esto le consta porque conoció a Luis Pizarro en la Gobernación Pedro Aguirre Cerda y después del 11 de septiembre, él también fue detenido y conducido al Estadio Nacional, donde se encontró con el demandante y por consiguiente le consta personalmente, tanto la detención injusta de Luis Pizarro como el hecho de que lo torturaron en reiteradas ocasiones, declara que cuando los llevaban al velódromo avisaban por los parlantes del estadio dando los nombres y apellidos. Estima que la suma demandada por daño moral no compensa el daño sufrido, pero en algo ayuda.



«RIT»

Foja: 1

- Domingo Antonio Paredes Contreras

Dice que conoce al demandante desde el año 1971, dado que son vecinos. Declara que lo detuvieron los carabineros el 13 de septiembre de 1973, lo llevaron a la 12° comisaria, donde fue golpeado y torturado y luego los militares lo llevaron al Estadio Chile y al Estadio Nacional, en todos estos lugares de detención, dice que fue torturado, relata que lo llevaban al velódromo para torturarlo, golpearlo y ponerle electricidad y hacían simulacros de fusilamiento. Considera que “psicológicamente andaba mal”, dice que esto lo sabe porque don Luis Pizarro, les contó a los vecinos lo que le había sucedido.

**SÉPTIMO:** Que el demandado, en apoyo de sus asertos, acompañó un oficio de fecha 19 de enero de 2021, remitido por el Instituto de Previsión Social.

**OCTAVO:** Que, sin perjuicio de no haber sido controvertido, con el mérito de los documentos signados con los numerales 1), 2), del considerando quinto, más las declaraciones reseñadas en el considerando sexto, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido el demandante víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

**NOVENO:** Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que “*El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado*”, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N° 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

**DÉCIMO:** Que los vejámenes de los que fue víctima el demandante de autos han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene



**Foja: 1**

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

Asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

**UNDÉCIMO:** Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley N° 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley N° 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$ 1.353.798 y \$ \$1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N°



**Foja: 1**

2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley N° 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

**DUODÉCIMO:** Que las leyes precedentemente señaladas, denominadas “*leyes de reparación*”, si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciias permitidas y equiparidad de beneficios que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

De acuerdo con lo razonado, procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

**DÉCIMO CUARTO:** Que la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario,





entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

**DÉCIMO QUINTO:** Que la prescripción extintiva de la acción deducida no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que, en la especie y como ya se ha dicho, se ha acreditado suficientemente que el demandante fue víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en aquel secuelas como las descritas por los testigos que depusieron en autos, suponiendo todo esto una incommensurable aflicción tanto espiritual como física experimentada por el actor, difícilmente superable por el mero transcurso del



«RIT»

Foja: 1

tiempo, y que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

**DÉCIMO NOVENO:** Que el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse el actor privado arbitrariamente de su libertad personal y luego sometido a diversas modalidades de tortura. De esta manera, los hechos en que incurrieron agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por el demandante, encontrándose aquel, en definitiva, obligado a indemnizarlo.

**VIGÉSIMO:** Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente que el demandado, mediante oficio remitido a este Tribunal por el Instituto de Previsión Social, acreditó que el actor ha sido beneficiario de pensiones pecuniarias por parte del Estado, en virtud de las denominadas *“leyes de reparación”*, por un total de \$ 34.701.511. Debido a ello, y teniendo presente lo ya consignado en el considerando duodécimo, se acogerá la demanda por lo que la suma que con motivo de esta sentencia se concederá al demandante a título de daño moral se fijará en la suma de \$70.000.000.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia, fijando con certeza inmediata el monto de la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “confirmación” del tribunal superior) y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital adeudado los intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce al absurdo de que, en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarán sin resarcir.



«RIT»

Foja: 1

Por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, no habiendo sido completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de éste.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, Y VISTO además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

- I. Que, se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.
- II. Que, se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, en cuanto se condena al demandado FISCO DE CHILE al pago de la suma de \$70.000.000 en favor del demandante, LUIS ALVARO PIZARRO QUINTANILLA, por concepto de daño moral.
- III. Que, la suma decretada precedentemente deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a contar de la época de notificación de la presente sentencia a la parte demandada y hasta la época de pago efectivo.
- IV. Que, no se condena al demandado al pago de las costas, por no haber resultado totalmente vencido.

***REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CONSÚLTESE SI NO SE APELARE***

**DICTADA POR DOÑA MARÍA SOFÍA GUTIERREZ BERMEDO, JUEZA TIRULAR.//**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Marzo de dos mil veintidós**



«RIT»

Foja: 1

